

Santiago, catorce de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, la Ministra en Visita Extraordinaria, señora Marianela Cifuentes Alarcón, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Antonio Benedictino Quirós Reyes y a Juan Francisco Saavedra Loyola, en calidad de autores del delito de asociación ilícita y del delito de secuestro calificado en contra de la víctima Ulises Merino Varas, perpetrado a partir del 2 de febrero de 1976, en la comuna de La Granja, ambos en grado consumado, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, por el primero de los ilícitos y a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, por el segundo. La misma sentencia condenó también como autores de los mismos ilícitos a Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán y Manuel Agustín Muñoz Gamboa, a las penas de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y ocho años de presidio mayor en su grado mínimo. Finalmente, sancionó en calidad de autores a Francisco Segundo Illanes Miranda, Ernesto Arturo Lobos Gálvez y Alejandro Segundo Sáez Mardones, a las penas de 541 días de presidio menor en su grado medio y 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, por cada uno de los referidos ilícitos.

En todos los casos más accesorias legales y, respecto de las cuales se ordenó su cumplimiento efectivo.

En el aspecto civil, luego de rechazar las excepciones de pago y prescripción opuestas por el Fisco de Chile, acogió, sin costas, la demanda civil de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, interpuesta por Francisca Wolff Cornejo y Mario Ulises Merino Wolff, conviviente e hijo de la víctima Ulises Merino Varas, condenando al demandado, a pagar la suma de



\$100.000.000 para Francisca Wolff Cornejo y \$80.000.000 para Mario Merino Wolff, más reajustes desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada hasta su pago efectivo e intereses desde que se constituya en mora.

Impugnada esa decisión, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, conociendo del recurso enderezado en su contra, la revoca en cuanto por ella condenó a Alejandro Segundo Saéz Mardones como autor del delito de asociación ilícita y en su lugar, lo sobresee definitiva y parcialmente, conforme al artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, confirmando en lo demás apelado el fallo recurrido.

Finalmente, en contra de esta última sentencia, se dedujeron los recursos de casación que pasan a examinarse, respecto de los cuales se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que, previo al análisis de los recursos impetrados, cabe mencionar que el fallo de primer grado asentó la existencia de los siguientes hechos que, en segunda instancia, se mantuvieron y son objeto de juzgamiento:

1° Que, en la época de los hechos, existió una organización jerárquica, disciplinada y con estructura militar denominada “Comando Conjunto”, integrada por individuos pertenecientes a los organismos de inteligencia de la Fuerza Aérea, Carabineros y Armada, esto es, a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), a la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR) y al Servicio de Inteligencia Naval (SIN), que, bajo el mando del General de Brigada Aérea Freddy Enrique Ruiz Bunger y de los Comandantes Antonio Benedicto Quirós Reyes y Juan Francisco Saavedra Loyola, tuvo, entre otras, la misión de la desarticulación del Partido Comunista y de su Juventud.



2° Que esta agrupación tenía su sede en el edificio ubicado en calle Juan Antonio Ríos N° 6 de la comuna de Santiago, denominado “JAR-6” y utilizaba como centros de detención y tortura los recintos “Remo Cero”, situado en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina; “La Firma”, ubicada en calle Dieciocho frente al N° 229 de la comuna de Santiago; la “Casa de Solteros”, emplazada en calle Bellavista N° 125 de la comuna de Providencia y la 24° Comisaría de Carabineros, situada en calle Las Tranqueras N° 840 de la comuna de Las Condes.

3° Que el 2 de febrero de 1976, alrededor de las 14:30 horas, Ulises Merino Varas, dirigente de la Juventud Comunista, fue detenido, sin derecho, por agentes del “Comando Conjunto”, en las inmediaciones de la Municipalidad de La Granja.

4° Que, posteriormente, Ulises Merino Varas estuvo privado de libertad en “Remo Cero”, “La Firma”, la 24° Comisaría de Carabineros de Las Condes y la “Casa de Solteros”.

5° Que, a fines de abril de 1976, Merino Varas fue trasladado nuevamente a “La Firma”, desconociéndose desde esa fecha su paradero.

SEGUNDO: Que, el hecho descrito, a juicio de la sentenciadora de instancia, constituye el delito de asociación ilícita, contemplado en el artículo 292 del Código Penal en relación con los artículos 293 y 294 del mismo cuerpo legal y del delito de secuestro calificado, cometido en la persona de Ulises Merino Varas, previsto en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Punitivo, ambos en grado consumado, en carácter de lesa humanidad, aspecto que se mantuvo en la revisión ejecutada por el Tribunal de Alzada.

TERCERO: Que, en contra de la sentencia de segundo grado, la defensa de Guimpert Corvalán, dedujo recurso de casación en el fondo,



cimentado en la causal prevista en el artículo 546, N° 1 del código adjetivo, denunciando como infracción de ley una inobservancia al artículo 103 del código de castigo, en lo que guarda relación con la prescripción gradual de la pena.

Argumenta que, al no haberse dado aplicación a la denominada prescripción gradual se incurre en un error de derecho, al asimilarla a la prescripción propiamente tal, en circunstancias de que se trata de institutos diversos, toda vez que la prescripción gradual está circunscrita únicamente a aplicar una atenuante muy calificada para efectos de imponer una pena morigerada, justificada en normas de Derechos Humanos.

Lo anterior conlleva a la infracción consecuencial del artículo 68, inciso tercero del Código Penal, respecto a la graduación de la pena a imponer. Termina solicitando invalidar la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que les reconozca, junto con la circunstancia minorante de irreprochable conducta anterior —ya reconocida—, las atenuantes de los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar, así como la prescripción gradual contenida en el artículo 103 del código punitivo y, aplicándose correctamente lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, se les condene a una pena no superior a la de presidio menor en su grado medio con alguno de los beneficios de la Ley 18.216.

CUARTO: Que, de la lectura del recurso, se advierte que aquel adolece de un defecto esencial, que conduce necesariamente a su rechazo, por cuanto en el arbitrio solo se denuncia la falta de aplicación del artículo 103 del Código Penal, no obstante ello, en su petitorio, solicita además de la aplicación de dicha norma, el reconocimiento de los artículos 211 y 241 del Código de Justicia Militar, lo que no fue abordado ni desarrollado en el recurso en examen,



deficiencia insalvable que se presenta en la interposición de un recurso extraordinario y de derecho estricto como lo es el de casación en el fondo, en donde predominan reglas procesales absolutas que no pueden ser soslayadas.

QUINTO: Que, pese a que lo razonado precedentemente resulta suficiente para desestimar el recurso entablado, respecto del reconocimiento de la circunstancia atenuante de responsabilidad que contempla el artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de lo expresado por el fallo impugnado, cabe señalar que, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha utilizado dos argumentos para desestimar esta causal del recurso, en tanto se afinca en el artículo 103 del Código Penal.

Por una parte, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de *ius cogens* provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo.

Pero junto con ello, se subraya que cualquiera sea la interpretación que pueda hacerse del fundamento del precepto legal en discusión, es lo cierto que las normas a las que se remite el artículo 103, otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación de disminuir la cuantía de la pena, aunque concurren varias atenuantes (entre otras, SCS N°s 35.788-2017, de 20 de marzo de 2018; y, 39.732-2017, de 14 de mayo de 2018). En tales condiciones, el recurso en estudio no puede prosperar.



SEXTO: Que, a continuación, recurre de casación en el fondo, la defensa del sentenciado Saavedra Loyola, dividiendo sus alegaciones en dos capítulos, en el primero, denuncia la infracción del numeral tercero del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, estimando que el fallo recurrido ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 293 del estatuto punitivo, al tener por acreditada la existencia del delito de asociación ilícita. Refiere que se equivocan los sentenciadores al estimar que un organismo militar o de las Fuerzas Armadas constituye una asociación ilícita, ya que, si así se estimare, en la lógica seguida en esta investigación por delitos contra los derechos humanos, habría que llegar a la conclusión que todas las Fuerzas Armadas constituirían una asociación ilícita, al haber sustituido el gobierno de la unidad popular, por un gobierno militar.

Si bien reconoce que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas o del Ejército se pueden confundir con asociaciones ilícitas puesto que ambos comparten ideas centrales, como la jerarquización y sus grados de dirección y mando, ello no es suficiente para calificarlas como tales, pues no hay ánimo delictual. Alega, además, que la pertenencia a una organización criminal no puede confundirse con coautoría o coparticipación y, que la existencia de personas coordinadas para un plan común, como ocurre en la especie, no puede transformar a todos los integrantes de dichas instituciones en miembros de una organización criminal.

A mayor abundamiento, señala que aun de considerárseles como una asociación ilícita, lo cierto es que, a la época de ocurrencia de los hechos, su representado no tenía el mando directo de éstos ni participó en ellos.

A continuación, invoca la causal del artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, respecto del delito de secuestro calificado, denunciando



como infringidos, los artículos 11 N° 7, 68 y 103 del Código Penal, en relación con el artículo 141 y 15 del Código Penal, al no haberse reconocido la concurrencia de la atenuante del 103 del Código Penal, en circunstancias que, desde la ocurrencia de los hechos, ya han transcurrido más de 39 años.

Considera también, que debió reconocerse a su representado la atenuante del 11 N° 7 del estatuto punitivo, esto es, la de reparar con celo el mal causado, puesto que cuando su representado tomó conocimiento de que se estaban realizando operativos sin su autorización, solicitó a sus superiores que se adoptaran medidas, lo que fue reconocido por su superior Freddy Ruiz Bunger.

Termina solicitando que se invalide la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo en la que se condene a Saavedra Loyola a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo o a la pena que se determine conforme a derecho, únicamente como autor del delito de secuestro calificado y se le conceda la libertad vigilada intensiva, como forma de cumplimiento alternativo de la pena.

SÉPTIMO: Que, respecto de la primera de las causales invocadas, el recurrente de nulidad sustancial ha centrado su alegación en cuestionar la decisión del tribunal de alzada que calificó los hechos constitutivos de un delito de asociación ilícita, fundado en una errónea aplicación de la ley penal, citando el artículo 292 del Código Penal en esa materia. Al respecto, cabe señalar, que, sin desconocer la relevancia de la referida disposición, lo cierto es que aquella no resulta bastante para abordar el examen de la resolución de la controversia de la forma en que se hizo por los juzgadores, al no venir denunciados los artículos 1, 14 y 15 del estatuto punitivo, preceptos que se omite invocar como erróneamente aplicados y que están directamente



vinculados a las contravenciones de índole procesal que se denuncian, haciendo únicamente, una referencia al artículo 292 del citado cuerpo normativo.

Es evidente, tal como lo ha reconocido reiteradamente esta Corte, que las normas sustantivas que tienen el carácter de decisoria litis y se habrían debido aplicar con infracción de ley, son los preceptos de fondo a que debe recurrir el tribunal de casación en el evento de tener por establecidos hechos distintos de aquellos que estableció la sentencia impugnada. (SCS, 13.10.1980, R., t. 77, secc. 4ª, p. 216).

En estas condiciones, al no venir acusado en el libelo de casación el quebrantamiento de las preceptivas sustantivas básicas en comento, su vigor se ve radicalmente debilitado, lo que conduce al rechazo del primer capítulo del presente arbitrio.

Respecto de la causal del numeral 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, fundada en que los sentenciadores no reconocieron la circunstancia atenuante de responsabilidad del artículo 11 N° 7 del Código Penal, es del caso señalar que, como lo ha resuelto esta Corte, la determinación de la concurrencia o no de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y su calificación, si procediere, constituye una labor privativa del órgano jurisdiccional cuya decisión se concreta en el fallo, de manera que la negativa a reconocer la circunstancia atenuante no configura una infracción de ley que tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por lo que dicha causal no puede prosperar.

Luego, y avocándonos al examen del error de derecho denunciado por la inaplicación de la rebaja prevista en el artículo 103 del Código Penal y, a fin



de evitar repeticiones innecesarias, estese a lo señalado en el considerando quinto precedente, como fundamento suficiente para el rechazo del recurso.

OCTAVO: Que la defensa de Alejandro Segundo Sáez Mardones, en su recurso de nulidad sustancial, invoca la causal establecida en el artículo 546 numeral 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 488 numeral 1º y 2º primera parte del Código de Procedimiento Penal, artículos 1, 14, 15, 141 del Código Penal, artículo 109 y 456 bis del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal.

Señala que la sentencia ha cometido un error de derecho al determinar la participación punible, en calidad de autor, del mencionado acusado en el delito de secuestro calificado, sin que existan elementos probatorios que lo sustenten.

Explica que su condena se fundamenta en presunciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, las que no cumplen los requisitos establecidos por la norma señalada para estimar la existencia de prueba completa que acredite la autoría que se le atribuye en los hechos investigados, puesto que se lo condena por el solo hecho de pertenecer al Comando Conjunto, en el cargo de Teniente, a la época de los hechos

Agrega que se establece su participación penal en base a meras conjeturas, no sobre la base de hechos reales y concretos debidamente acreditados que emanen de las pruebas allegadas a la causa, estimando que, en la especie por la exigua prueba existente, resulta insuficiente para formar la convicción del sentenciador conforme al artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, sobre todo teniendo en consideración que su



representado no tuvo participación ni en la detención ni la posterior privación ilegítima de la libertad de la víctima, así como tampoco ordenó que aquello sucediera.

Concluye pidiendo que se acojan los recursos, invalidando en su integridad la sentencia impugnada, dictando, acto continuo y sin nueva vista, sentencia de reemplazo que absuelva de todo cargo al mencionado acusado, en los términos expuestos en los recursos.

NOVENO: Que, el recurso en análisis esgrime –en rigor- en un mismo capítulo y de manera conjunta las causales séptima y primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, vicios de nulidad que se configurarían al habersele condenado como autor del delito de secuestro calificado, en los términos previstos en el artículo 15 del Código Penal, en circunstancias de que la prueba no cumple lo previsto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, por lo que debió ser absuelto por falta de participación en el ilícito.

Como se observa, la infracción del N° 1 de la norma ya citada, supone necesariamente que los hechos fueron correctamente establecidos y que los mismos resultan constitutivos de delito, para sostener igualmente la causal prevista en el 546 N° 7, esto es, haberse violado las leyes reguladoras de la prueba, desconociendo los hechos asentados por el juzgador, que -por el contrario- los acepta al esgrimir el primer motivo de invalidación.

Como se ve, cada postulado supone el abandono de la tesis anterior, condiciones en las que el arbitrio no puede ser atendido, porque no cabe dejar subordinada la efectividad de unos vicios a la existencia o inexistencia de otros, desatendiéndose la ritualidad que es propia de este recurso de derecho estricto, el que, por tal motivo, será rechazado (SCS N° 19.165-17, de 27 de



septiembre de 2017 y N° 35.788 de 20 de septiembre de 2018; 13877-2019, de 24 de diciembre de 2021; 12820-2019 de 8 de noviembre de 2021).

En efecto, los vicios que constituyen las hipótesis invocadas no pueden proponerse en forma simultánea, pues ello importa que, ante la pluralidad, sea este Tribunal quien opte por alguno de los motivos de nulidad, función que inequívocamente no le corresponde a la Corte.

DÉCIMO: Que, tal forma de fundar su recurso, esgrimiendo hechos, razones y consecuencias legales incompatibles, no resulta aceptable tratándose de un recurso extraordinario y de derecho estricto como lo es el de casación en el fondo, en el cual cabe demandar, para que esta Corte pueda entrar al estudio y decisión del mismo, que se señale y explique con precisión y fundamento los errores de derecho que se advierten en el fallo, así como su influencia sustancial en su parte dispositiva, características de las que adolece el fallo en estudio.

UNDÉCIMO: Que, sin perjuicio del defecto insalvable del recurso, conviene aclarar que –a diferencia de lo alegado en el recurso- la sentencia recurrida, al examinar la participación del encartado en el delito de secuestro calificado, en el motivo 41°, analiza las declaraciones prestadas por Miguel Arturo Estay Reyno, Pedro Ernesto Caamaño Medina, Robinson Alfonso Suazo Jaque, Pedro Juan Zambrano Uribe, César Luis Adolfo Palma Ramírez y Antonio Paredes Pedraza, todos agentes del Comando Conjunto, los que corroboraron que en la época de los hechos Alejandro Sáez Mardones, alias “Jano”, prestaba servicios en “La Firma” e integraba el equipo operativo a cargo del Teniente de Carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa, concluyendo, conforme a sus declaraciones que, Alejandro Sáez Mardones, en calidad de funcionario subalterno, realizó diversas actividades relacionadas con los



detenidos de “La Firma”, entre ellas, formó parte del equipo operativo que a fines de marzo de 1976 trasladó a Ulises Merino Varas, entre otros, desde “La Firma” a la Comisaría de Carabineros de calle Las Tranqueras y del equipo encargado de la custodia de Merino Varas en la “Casa de Solteros” del Barrio Bellavista.

De esa manera, los elementos del ilícito examinado y la participación en ellos del acusado, se estimaron verificados por el tribunal de primera instancia, lo que fue ratificado por el de segunda, que en su considerando cuarto último párrafo, señala que: *“Finalmente, respecto del acusado Alejandro Segundo Sáez Mardones, en autos obran antecedentes suficientes para tener por acreditada su participación, a saber, su propio testimonio, que rola a fs. 425, 892 y 3.712 –y donde reconoce haber participado en el Comando Conjunto, realizar funciones en “La Firma” y participar de ciertas detenciones-; las declaraciones de Miguel Arturo Estay Reyno y de Pedro Ernesto Caamaño Medina, quienes son contestes en señalar la participación de este acusado, en términos similares a los ya relatados respecto de los anteriores funcionarios de Carabineros, quienes incluso habrían trasladado a la víctima Merino Varas de un centro de tortura a otro”,* conclusión que esta Corte comparte.

DUODÉCIMO: Que, finalmente, el recurso deducido en favor del sentenciado Francisco Illanes Miranda, funda su reclamo en la causal del numeral 7 del artículo 546 del código adjetivo, denunciando la infracción a las normas reguladoras de la prueba contenidas en los artículos 482 y 488 N° 1 y 2°, primera parte, y 456 bis del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 15, 141 y 293 del Código Penal, desde que -asegura- los elementos de juicio reseñados en la sentencia de primer grado, no resultan suficientes para acreditar su participación criminal, puesto que para ello se



consideró la propia declaración de su defendido, la que la sentencia ha calificado como una confesión judicial del artículo 482 ya citado, sin que concurra ninguno de los requisitos para su configuración.

Asegura que no es posible configurar una presunción judicial con los antecedentes probatorios señalados y menos aún permiten concluir que su defendido estaría confeso, pues aquel no reconoció ser integrante del Comando Conjunto, sino que solo sostuvo que a la fecha su cargo era de Carabinero y que formaba parte del personal civil destinado a recopilar información para postulantes a dicha institución.

Respecto del delito de asociación ilícita, sostiene que aquel no se configura, puesto que su representado únicamente cumplía con las ordenes emanadas de sus superiores.

Termina solicitando, se acoja el recurso, se anule la sentencia impugnada y de dicte en su reemplazo una en que se absuelva a su representado de los cargos formulados en su contra, por falta de participación.

DÉCIMO TERCERO: Que, del análisis del recurso, se advierte que la causal que se invoca (infracción a la ley reguladora de la prueba), se esgrime aisladamente y no se le vincula con otra de las causales de invalidación que prevé el artículo 546 del Código Procesal Penal, por lo que debe ser desestimado. En efecto, si lo que se pretende es que se altere el sustrato fáctico del fallo impugnado, es menester que conjuntamente se relacione ello con otro de los motivos de nulidad que dicho precepto consagra, por cuanto la sola mutación de los hechos no permite que este tribunal de casación pueda hacer uso de sus facultades invalidatorias determinando, de oficio, cual de aquellas otras causales –taxativamente señaladas en el estatuto procesal del



ramo- que denoten una errada aplicación de la ley corresponde hacer concurrente;

Pese a que lo anterior es suficiente para desestimar el recurso en examen, cabe señalar que, además, el recurrente cuestiona la valoración ejecutada por los jurisdicentes, señalando que ella vulnera las leyes reguladoras de la prueba y no permitiría alcanzar a la conclusión condenatoria arribada, sin embargo, más allá de esta afirmación, en ninguna parte de su arbitrio se desarrolla de manera adecuada la forma en que se afectaron dichas normas de valoración. Es más, el articulista tan solo asevera la infracción, construyendo el reclamo en afirmaciones tan generales como las que observa en el fallo y que, en realidad, buscan que esta Corte efectúe un ejercicio vedado para esta sede, cual es, una nueva ponderación de los medios probatorios los que, por lo demás, fueron debidamente justipreciados por los sentenciadores del grado.

En este sentido, no está demás mencionar que los jueces de instancia son soberanos en torno a la fijación de los hechos y con ello, a la Corte Suprema, le está negada su revisión y se le obliga a aceptarlos, siempre y cuando no exista una vulneración palmaria y flagrante sobre alguna ley reguladora de la prueba que, como dispone el motivo de casación, influya substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, lo que no acontece en la especie, siendo del todo insuficiente una enumeración de las normas legales que se denuncien violentadas o la descripción parcializada de ciertos elementos probatorios.

Con lo dicho, es posible concluir que el recurso pretende la ejecución de una tarea que ya fue efectuada en ambas instancias, entregándose razones legales para adoptar la decisión que ahora se cuestiona, pero que, en concreto,



se sustenta en un ejercicio privativo de los jueces y en los que no se observan los vicios que se les atribuye a ellos, debiendo así ser desechado el recurso presentado.

DÉCIMO CUARTO: Que, no obstante el rechazo de los arbitrios de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de un vicio de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal a quo y con ello hizo suyo todos los aspectos tratados en aquella, entre ellos, la evidente falta de consideraciones asociadas a la configuración de uno de los delitos por los cuales, finalmente, se condenó a los sentenciados, de allí que resulta imperioso el análisis que, sobre dicho tópico, aborda la jueza instructora.

En efecto, conforme se observa en los considerandos décimo a décimo quinto del laudo de segunda instancia, los sentenciadores validaron el ejercicio de subsunción realizado por la ministra Instructora en su sentencia, en cuanto aquella estimó la concurrencia tanto del delito de secuestro calificado, como del delito de asociación ilícita, ambos en carácter de lesa humanidad, aspecto que fue desarrollado -en lo que dice relación con el último de aquellos delitos- en las reflexiones contenidas en los considerandos segundo y desde sus fundamentos cuarto a octavo de la sentencia primer grado.

En el último de los considerandos señalados, se observan las ideas que mantiene la sentenciadora en torno al delito en comento, en efecto razona en el sentido de que un grupo de individuos pertenecientes a distintos organismos de inteligencia y de defensa del Estado, se reunieron para la consecución de un objetivo común, esto es, la neutralización del partido comunista y de la juventud comunista, mediante la comisión de crímenes en contra de sus dirigentes y militantes, organización que estimó tenía un carácter de permanente en el



tiempo, puesto que aquella no se habría limitado a la realización de actos delictivos concretos, sino que perduró pese a la consumación, la que tenía una organización jerarquizada, propia de las instituciones de defensa, distinguiéndose tanto personal al mando como a oficiales subalternos y aquellos que solo desempeñaron acciones en calidad de miembros y colaboradores.

DÉCIMO QUINTO: Que, en este orden de cosas, es el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, el que establece los requisitos que contienen las sentencias de primera instancia y la segunda que modifique o revoque la de otro tribunal, fijando en su numerando 5º: *“Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio”*.

Tal como se advierte, conforme a lo que se viene revisando, el legislador exige la expresión de las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, lo que se traduce en que *“todo fallo sea capaz de explicar por sí mismo los motivos de hecho y los razonamientos de derecho que, necesariamente, conducen a su conclusión, de modo que pueda llevar al ánimo de las partes y de la comunidad en general el convencimiento de que es auténtica expresión de justicia”*. (Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código de Procedimiento Penal. Tomo II. Pg. 48. Editorial Jurídica).

En otras palabras, esta exigencia se vincula con el deber de fundamentación de toda resolución judicial, aspecto sobre el cual esta Corte Suprema, especialmente en el marco de la acción constitucional de amparo, ha emitido diferentes pronunciamientos que van dirigidos al control de este



requerimiento que, en definitiva, forma parte de un Estado de Derecho en el que, sus autoridades, expresan las razones de sus decisiones y concretizan uno de los aspectos de la garantía fundamental de un procedimiento racional y justo que asegura el inciso 6°, numeral 3° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental y que se replica en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En este sentido, la sola circunstancia de cumplir con el deber de investigación no es suficiente para obviar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que se exigen para subsumir una conducta en un tipo penal, pues, como rezan los artículos 108 y 109 del Código de Procedimiento Penal: *“La existencia del hecho punible es el fundamento de todo juicio criminal, y su comprobación por los medios que admite la ley es el primer objeto a que deben tender las investigaciones del sumario”* y *“El juez debe investigar, con igual celo, no sólo los hechos y circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan de ella o la extingan o atenúen”*. Requisitos que no cumple la sentencia en estudio, por cuanto carece de la fundamentación necesaria, además de un análisis riguroso en torno a la correcta subsunción de los hechos en la figura penal de asociación ilícita.

De ese modo, no es posible encontrar en el fallo en estudio reflexiones que permitan dilucidar las circunstancias que llevaron a los jueces a resolver adecuadamente la forma en que lo hicieron, lo que prueba la ausencia de los requisitos que les ordena la ley en la dictación de la sentencia y que conlleva como sanción la nulidad.

DÉCIMO SEXTO: Que, en efecto, respecto del dicho delito, a través de varios pronunciamientos de esta Corte, entre otros, los recaídos en los



ingresos Rol N° 5576-07, de siete de agosto de dos mil ocho; Rol N° 2747-09, de once de marzo de dos mil diez; Rol N° 7712 - 08, de quince de marzo de dos mil diez, Rol N° 737-11, de veintitrés de noviembre de dos mil doce, la jurisprudencia ha desarrollado los criterios o elementos necesarios para llenar de contenido el tipo delictivo en análisis, a saber: la existencia de estructuras jerarquizadas, de comunicaciones y/o instrucciones, en la que unas personas, con mayor responsabilidad, dan las órdenes a otras que las ejecutan, donde las primeras normalmente están más apartadas del objeto del injusto; concertación, reparto de tareas -lo que hace que un miembro con un cometido específico pueda ser reemplazado por otro sin que resulte afectado el grupo- y una cierta estabilidad temporal, sin perjuicio de la evolución o acomodación de su estructura originaria según las circunstancias sobrevenidas, en busca de una mayor eficacia en sus objetivos ilícitos y mayores obstaculizaciones o dificultades en el descubrimiento de una red criminal.

La asociación lleva consigo, por su propia naturaleza, una distribución de cometidos y de tareas a desarrollar, incluso, una cierta jerarquización, empleo de medios materiales, continuidad temporal del plan criminal más allá de la simple u ocasional convergencia para el delito o mera co-delincuencia, en los que la conducta del autor -asociado para delinquir- deriva en que él sujeta su voluntad a la del grupo, y de este modo se inserta en la organización, siendo necesario *“que haya existido, al menos, una exteriorización de la conducta de sus integrantes que permita a todos ellos reconocerse entre sí como pertenecientes a un conjunto que comparte objetivos comunes, esto es, que la asociación se forma para cometer delitos”* (Patricia Ziffer, “El Delito de Asociación Ilícita”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, Argentina, año 2005, p. 72). Esta misma autora expresa que: *“ello supone la existencia de algunas reglas*



vinculantes para todos los miembros con respecto a la formación de la 'voluntad social'; aún cuando no haya relaciones de subordinación entre los miembros, para que la agrupación funcione como tal, es requisito la aceptación común de esas reglas" (ob. cit., p. 73).

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, las probanzas reunidas en relación con este delito, relacionadas en la sentencia, a diferencia de lo sostenido, no permiten arribar a la convicción que en autos concurren todos los elementos configurativos del tipo penal de asociación ilícita atribuido a determinados encausados, sea en carácter de jefes, sea en carácter de miembros.

En efecto, la mera presencia de los individuos señalados, con la decisión común de ejecutar unos hechos típicos contra los mismos bienes jurídicos, implica una pluralidad de autores o partícipes en los hechos delictivos comunes, pero que no tiene por qué importar la aplicación de un plan criminal a desarrollar con arreglo a requisitos o estándares como los de una organización o asociación criminal, lo que impide advertir, en el caso de autos, la presencia de tales exigencias que permita sostener la figura de la asociación ilícita, siendo al efecto insuficiente la sola convergencia de acciones que concatenadas conducen a un fin, ni siquiera claro para todos los que intervienen en aquel.

En la situación en estudio, más que una estructura jerárquica, con sujetos que ejercían mando sobre otros, lo que aquí hubo fue una relación de coparticipación incluso circunstancial, no siendo apreciable de manera unívoca, elementos que conformen una organización cuyo fin haya sido trascender la esfera de interacciones propias de una mera intervención plural en un hecho punible, en particular considerando la relación de los sentenciados por este delito en particular.



DÉCIMO OCTAVO: Que, las falencias a que se hace referencia se advierten tanto en el fallo de primera instancia, como en el de segunda. En efecto, la sentenciadora de primera, luego definir lo que se entiende por asociación ilícita y, citar los medios probatorios que se tuvieron en consideración para tenerlo por acreditado, concluye, en su razonando octavo señalando que, se habría probado la existencia de una asociación ilícita, por cuanto se acreditó que un grupo de individuos, pertenecientes a los organismos de inteligencia de la Fuerza Aérea, Carabineros y Armada, se reunió para la consecución de un objetivo común, que era la neutralización del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, a través de la comisión de crímenes en contra de sus dirigentes y militantes, la que tuvo un carácter permanente en el tiempo, ya que se proyectó más allá de la realización de algunos actos delictivos concretos, perdurando a pesar de la consumación de éstos, el que estimó, gozaba de una organización jerarquizada, ya que se valió de la estructura propia de las instituciones de la Defensa y de Carabineros de Chile para establecer la organización interna de la agrupación, distinguiéndose quienes ejercieron mando en ella, de aquellos que integraron la asociación en calidad de miembros y colaboradores, escribientes, choferes y guardias de los centros de detención.

Por otra parte, el laudo de segunda instancia, compartiendo lo sostenido por la sentencia de primera, en los últimos dos párrafos de su considerando décimo segundo señala que: “ *En síntesis, de los antecedentes recabados durante la causa, y respecto de los cuales se da una detallada referencia en la sentencia, aparece probado que se formó una agrupación compuesta preferentemente por funcionarios de las fuerzas armadas y de carabineros, pero también integrada por civiles, con la finalidad de detener y encerrar a*



civiles pertenecientes a un conglomerado político –en la especie el Partido Comunista- que se oponía al régimen imperante de la época, utilizando para ello diversas instalaciones dispuestas para tal efecto, al margen de toda legalidad, pues perseguía la consumación de un objetivo penalmente antijurídico. En ese actuar injusto, la organización contaba con u infraestructura que le permitía desafiar la institucionalidad del Estado y asegurar el logro de sus fines. Para ello contaba, además, con un número suficientes de personas – no solo militares, sino también civiles- que pertenecían a una organización jerarquizada, lo que se mantuvo en el tiempo.

Así las cosas, y considerando que en este caso el Comando Conjunto se formó como una organización criminal que tenía por objeto atentar fundamentalmente contra las personas, que estableció una jerarquía entre sus miembros, que tenía definida funciones para lograr el objetivo propuesto, cual es la detención y encierro de miembros de las juventudes comunistas, no puede sino compartirse con la juez a quo que en la especie corresponde apreciar el artículo 292 del Código Penal, conforme se hizo”.

DÉCIMO NOVENO: Que, a diferencia de lo sostenido en la sentencia que se revisa, no es posible concluir ni determinar de manera irrefutable cuál de los acusados era “el jefe” de la organización, ni que entre los miembros restantes haya existido una “cúpula y dirigidos”, ni menos que haya existido normas propias vigentes de modo permanente como tampoco medios o capital estable disponibles para obtener o asegurar los fines del grupo, no siendo suficiente para ello la sola estructura jerarquizada que, poseen naturalmente las instituciones de defensa.

Por todos estos elementos, no es posible, a juicio del tribunal, tener por establecidos los elementos del tipo de la asociación ilícita, procediéndose en



consecuencia, a dictar sentencia absolutoria respecto de los encausados Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, Juan Francisco Saavedra Loyola, Francisco Segundo Illanes Miranda, Manuel Agustín Muñoz Gamboa y Ernesto Arturo Lobos Gálvez, por no configurarse a su respecto el hecho punible por el cual fueron acusados como autores del delito de asociación ilícita, de conformidad dispone el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, puesto que en el fallo de primer grado no existe una comprobación real sobre los aspectos propios de la tipicidad de la figura penal, deficiencias u omisiones que no fueron corregidas – como debieron serlo – en el fallo de segunda instancia, puesto que éste se limita a concordar con aquel, sin agregar una consideración propia en este extremo, lo cual conforma un vicio de casación de forma, en particular la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numerando 5º del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo.

Lo señalado precedentemente se aplica también respecto de Alejandro Segundo Sáez Mardones, el que, si bien fue absuelto en segunda instancia, ello no fue por considerarse que no se cumplen a su respecto con los requisitos del tipo penal, sino que lo fue por aplicación de lo dispuesto en el artículo 408 N° 7 del Código de Procedimiento Penal.

VIGÉSIMO: Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, puede este tribunal, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un



vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a Derecho.

Y, de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal; y, 775 del Código de Procedimiento Civil, se **RESUELVE**:

I.- Que, se **rechazan** los recursos de casación en el fondo, interpuestos en favor de los condenados Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, Juan Francisco Saavedra Loyola, Alejandro Segundo Sáez Mardones y Francisco Segundo Illanes Miranda, presentados por sus defensas, en contra de la sentencia definitiva de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

II.- Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos décimo cuarto a décimo noveno, **se invalidará de oficio** la referida sentencia, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Redacción a cargo de la Ministra señora Letelier R.

Regístrese.

Rol N°3.989-2022.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por el Ministro Sr. Manuel Antonio Valderrama R., las Ministras Sras. María Teresa Letelier R. y María Cristina Gajardo H., y las Abogadas Integrantes Sras. Leonor Etcheberry C. y Andrea Ruiz O. Santiago, 14 de mayo de 2025.



MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 14/05/2025 12:26:52

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 14/05/2025 12:26:52

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 14/05/2025 12:26:53

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 14/05/2025 13:33:16

ANDREA PAOLA RUIZ ROSAS
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 14/05/2025 13:33:17



En Santiago, a catorce de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, catorce de mayo de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado en el fallo de casación de esta misma fecha y rol y, teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

Vistos:

Se reproduce el fallo impugnado, con las siguientes excepciones:

a) Se eliminan los considerandos 2°; 4°; 5°; 6°; 7°; 8°; 44°;

b) Del 13°, en su párrafo segundo, se elimina la frase *“constituyen el delito de asociación ilícita, contemplado en el artículo 292 del Código Penal en relación con los artículos 293 y 294 del mismo cuerpo legal y el delito de secuestro calificado de Ulises Merino Varas, previsto en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Punitivo, ambos en grado consumado”*, la que se sustituye por *“constituye el delito de secuestro calificado de Ulises Merino Varas, previsto en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Punitivo, en grado consumado”*. Del mismo considerando se eliminan también los párrafos tercero y cuarto;

c) En los considerandos 17°, 21°, 25°, 29°, 33°, 37°, 41°, 48°, se sustituye la frase *“de los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado”*, por la oración *“del delito de secuestro calificado”*;

d) En los considerandos 18°, 22°, 26°, 30°, 34°, 38°, 42°, se elimina el párrafo primero y la palabra *“Asimismo”* del párrafo segundo;

e) Del considerando 84°, se eliminan sus letras a), b), e) y f), en tanto que de su letra c) se elimina la frase *“asimismo”* y en la letra g) se suprime la expresión *“por su parte”*.



De la sentencia anulada de la Corte de Apelaciones de San Miguel se reproducen los considerandos contenidos en los capítulos I; II y III y, considerandos 3° al 9° y considerandos 21° a 38°.

Finalmente se reproducen los fundamentos 16° a 18° del fallo de casación que antecede.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que, los presupuestos fácticos acreditados en autos y, que se encuentran en el fundamento décimo segundo del fallo que se revisa, en relación a las diversas piezas del proceso, **constituyen el delito de secuestro calificado** de Ulises Merino Varas, previsto y sancionado en el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal, en grado de consumado, cometido a partir del 2 de febrero de 1973, debiendo descartarse las pretensiones de los acusadores particulares, contenidas en su presentación, en relación al delito de asociación ilícita.

Segundo: Que, atento a lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, *nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley.*

Tercero: Que, en este orden de consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 514 del Código de Procedimiento Penal, se disiente de la opinión del Ministerio Público Judicial, en cuanto requirió la confirmatoria del fallo en alzada, con las declaraciones que señala.

Por estas consideraciones y visto, además, lo señalado en los artículos 510 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se resuelve que:



I.- **Se revoca** la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veinte, en la parte que condena a **JUAN FRANCISCO SAAVEDRA LOYOLA, DANIEL LUIS ENRIQUE GUIMPERT CORVALÁN, MANUEL AGUSTÍN MUÑOZ GAMBOA, FRANCISCO SEGUNDO ILLANES MIRANDA, ERNESTO ARTURO LOBOS GÁLVES y ALEJANDRO SEGUNDO SÁEZ MARDONES**, como autores del delito de asociación ilícita, en grado de consumado, cometido a partir del 2 de febrero de 1976 y, en su lugar, se les absuelve de dicho cargo.

II.- Se **confirma** en lo demás apelado y se **aprueba** en lo consultado el citado fallo.

Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier R.

Regístrese y devuélvase con sus tomos y agregados.

Rol N°3.989-2022

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por el Ministro Sr. Manuel Antonio Valderrama R., las Ministras Sras. María Teresa Letelier R. y María Cristina Gajardo H., y las Abogadas Integrantes Sras. Leonor Etcheberry C. y Andrea Ruiz O. Santiago, 14 de mayo de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 14/05/2025 12:26:54

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 14/05/2025 12:26:55

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 14/05/2025 12:26:55

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY
COURT
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 14/05/2025 13:33:19



ANDREA PAOLA RUIZ ROSAS
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 14/05/2025 13:33:19



En Santiago, a catorce de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

